

# ¿CÓDIGO EUROPEO DE CONSUMO O CÓDIGOS NACIONALES<sup>1</sup>?

GILLES PAISANT

Universidad de Saboya (Chambéry, Francia)

Decano honorario de la Facultad de Derecho y Economía

## EXCEROTOS

*“Las primeras manifestaciones concretas de la voluntad política de proteger a los consumidores aparecieron mucho más tarde con la adopción, por el Consejo de la CEE el 14 de abril de 1975, de un programa preliminar de protección”*

*“Hoy en día, con una Unión Europea que reúne a 28 Estados miembros y alrededor de quinientos millones de consumidores, las normas que los protegen gozan de un gran alcance”*

*“Los encargados de dictar soluciones, los jueces nacionales, reaccionarán según los principios derivados de su propia tradición jurídica: por consiguiente, tantos jueces, tantas interpretaciones”*

*“Y, lo que es más importante, no puede olvidarse que sobre algunas cuestiones la Unión no tiene competencia”*

*“La codificación europea del derecho de consumo produciría varios e importantes inconvenientes prácticos”*

*“La experiencia demuestra, en efecto, que se necesita mucho tiempo, no sólo para establecer una norma común, sino también para revisarla”*

*“Por supuesto, una codificación a derecho constante no tiene como objetivo consolidar el derecho aplicable, pues no impide las evoluciones legislativas, ni tampoco las innovaciones que completen o cambien las normas vigentes”*

## Introducción

**1** La pregunta sólo deja la elección entre dos posibilidades: un código o un código. Es decir que se supone resuelta la cuestión de si es necesario codificar o no el derecho de consumo.

Evidentes e importantes son las ventajas de la codificación. Un código, que reúna en un mismo instrumento el conjunto de normas dedicadas a la protección de los consumidores, contribuye, por su carácter sistemático, a facilitar el conocimiento y la comprensión de tales normas. Desde este punto de vista, la codificación permite una mayor efectividad del derecho de consumo. En efecto, una norma de derecho no puede aplicarse cuando es ignorada. Gracias al código, los consumidores no pueden en adelante ignorar la existencia de un conjunto de leyes, de fácil acceso, que les otorga numerosos derechos. Además, mejor que una ley, aun de carácter general, un código de consumo expresa una verdadera consagración del derecho de consumo: un Código, un Derecho<sup>2</sup>. Confirma el desarrollo y la originalidad de este derecho pluridisciplinar, especial por su ámbito de aplicación, su función y su metodología. Por fin, la codificación del derecho de consumo presenta una significación política. Afirmar la voluntad eminente y duradera de los poderes públicos de proporcionar a los consumidores una protección adecuada en consideración de su situación de inferioridad o debilidad en el marco de sus relaciones con los profesionales<sup>3</sup>.

**2.** A nivel nacional, sabemos que hasta el momento sólo cuatro países de la Unión Europea se han dotado de un declarado “Código” de consumo: Francia<sup>4</sup>, Rumanía<sup>5</sup>, Italia<sup>6</sup> y Luxemburgo<sup>7</sup>. Y fuera de la Unión, dos, que yo sepa: Brasil<sup>8</sup> y Perú<sup>9</sup>. Es decir, sólo países latinos. España actuó en este sentido con la codificación parcial realizada por el Real Decreto-Legislativo de 16 de noviembre de 2007<sup>10</sup>, en el que se han refundido en un único texto la anterior Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, así como otras leyes complementarias<sup>11</sup>. Otros países han actuado también en el mismo sentido con una ley de carácter general dedicada a diversos aspectos de la defensa de los intereses de los consumidores.

De todas formas, fue en los Estados-nación en los que aparecieron, de forma abierta, las primeras normas específicas en beneficio de los consumidores a finales de los años sesenta, empezando por Suecia a principios de los años setenta con el fin de acompañar la instalación y el desarrollo de la “sociedad de consumo”. En Francia, al igual que en Italia y en Luxemburgo, diversas leyes especiales precedieron a la obra codificadora.

3. A nivel de la Unión Europea, aun mencionando varias veces la palabra “consumidor”, el Tratado de Roma de 1957 no abarcaba ninguna disposición dedicada a la protección de aquél. El tema no estaba en el orden del día, ni tampoco en el de los Estados miembros que formaban en esa época la Comunidad Económica Europea (CEE). La sociedad de consumo aún no existía.

Las primeras manifestaciones concretas de la voluntad política de proteger a los consumidores aparecieron mucho más tarde con la adopción, por el Consejo de la CEE el 14 de abril de 1975, de un programa preliminar de protección<sup>12</sup>. Cinco derechos fundamentales fueron reconocidos, todos ellos de actualidad: protección de la salud y de la seguridad, protección de los intereses económicos, derecho a la indemnización de daños, derecho a la formación y a la educación y, por fin, derecho a estar representado. Poco tiempo después se adoptaron las primeras directivas sobre la calidad y la seguridad de diversos productos industriales. En 1978 se puede mencionar, para la buena información de los consumidores, la importante directiva sobre el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios de 18 de diciembre de 1978<sup>13</sup>. En cambio, para las primeras directivas relativas a la protección de los intereses económicos y contractuales hubo que esperar hasta mediados de los años 1980<sup>14</sup>, es decir más de diez años después de las primeras legislaciones nacionales al respecto.

Salvo la excepción de la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, sobre la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, considerada de armonización completa en el año 2002<sup>15</sup>, aquellas primeras normas comunitarias eran de armonización mínima. Es decir, que autorizaban a los Estados miembros a mantener o adoptar reglas más protectoras de los consumidores en su propio orden jurídico.

4. Hoy en día, con una Unión Europea que reúne a 28 Estados miembros<sup>16</sup> y alrededor de quinientos millones de consumidores, las normas que los protegen gozan de un gran alcance. Se protege a todos los consumidores en el seno de la Unión Europea. Y, habida cuenta de que la meta de dicha amplia Unión consiste en el establecimiento de un “mercado interior”<sup>17</sup> que debe velar de modo expreso por la promoción de los intereses de los consumidores<sup>18</sup> con el fin de garantizarles un “nivel elevado” de protección<sup>19</sup>, se plantea la cuestión de si ya no existen los elementos de una codificación europea del derecho de consumo (I). Sin embargo, no es cierto que dichos elementos sean suficientemente determinantes para considerar obsoleta la idea de codificación nacional (II).

## I. Los elementos de una codificación europea

5. Es una realidad: desde algunos años, la Unión Europea ha comenzado un proceso de uniformización de las normas dedicadas a la protección de los intereses de los consumidores (A). Bajo el impulso de la Comisión Europea, existe una indiscutible voluntad política en este sentido que se traduce por la adopción de importantes textos de armonización completa<sup>20</sup>, es decir normas que obstaculizan al mantenimiento o la implementación de normas distintas, aun más protectoras, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. A pesar de esa tendencia, no puede convencer la idea misma de uniformización, que, de hecho, aun en este ámbito, no representa más que una inoportuna ilusión (B).

### A. La tendencia hacia la uniformización

6. Se aprecia este proceso a partir del año 2000. A continuación de la orientación expresada por la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el comercio electrónico, fue la Directiva 2002/65/CE, de 22 de septiembre de 2002, sobre la comercialización a distancia de los servicios financieros, la que introdujo el proceso de armonización completa en el ámbito especialmente dedicado a los consumidores. Esa elección se funda sobre el hecho de que disposiciones nacionales “divergentes o diferentes” en aquella área “podrían tener una incidencia negativa en el funcionamiento del mercado interior y en la competencia entre las empresas dentro de éste”<sup>21</sup>. Precisamente, dicha directiva se adoptó en consideración al artículo 95 del Tratado CE<sup>22</sup>, previendo la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Desde esa época, se desarrolló el fenómeno. Siguió, de modo repetido y sin excepción, con el mismo fundamento textual. Este fue el caso de la Directiva 2005/79/CE, de 11 de mayo de 2005, sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva 2008/48/CE, de 23 de abril de 2008, relativa al crédito al consumo, la Directiva 2008/122/CE, de 14 de enero de 2009, sobre los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y, últimamente, la importante Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

Aquellos últimos cuatro textos son particularmente significativos de las orientaciones actuales de las instancias de la Unión Europea en la medida en que, cada uno en su propio ámbito de aplicación, sustituye a anteriores

directivas de armonización mínima que autorizaban los Estados miembros a mantener o adoptar normas más protectoras a favor de los consumidores. Desde principios del año 2000 resulta muy claro que hemos pasado en este ámbito del sistema de la armonización mínima a un principio de armonización completa.

7. En cada caso, la Comisión ha presentado, como un dogma, los mismos argumentos. En su opinión, las disparidades entre las legislaciones nacionales, permitidas por las directivas “de mínimos”, crean obstáculos significativos en el mercado interior que afectan a los empresarios y a los consumidores.

Primero, la fragmentación legislativa provoca distorsiones de competencia entre los proveedores, en detrimento de los que actúan en un país de mayor protección donde la mayor carga reglamentaria se concreta en un aumento de los costes de producción o comercialización. Asimismo, las diferencias entre las legislaciones nacionales, sigue argumentando la Comisión, disuaden de modo inoportuno a los comerciantes de realizar operaciones transfronterizas como consecuencia de los gastos necesarios para la puesta en conformidad jurídica de sus contratos.

Por otra parte, dicha fragmentación afecta también a la confianza de los consumidores en el mercado interior. Es decir que, según las instancias europeas, como consecuencia de las disparidades existentes, los consumidores dudan en contratar con un comerciante o empresario de otro Estado de la Unión; porque, desconociendo el derecho aplicable en dicho Estado, no saben si pueden gozar de los mismos derechos o garantías que al contratar en su propio país. En consecuencia, se privarían de las oportunidades ofrecidas por el mercado interior de proporcionar bienes o servicios menos costosos, en especial por intermedio de internet.

8. En nombre de la realización del mercado interior, el sistema de la armonización completa ha desembocado así, desde hace algunos años, en un conjunto relevante de normas europeas uniformes dedicadas a la protección de los consumidores. Esta uniformización resulta tanto más importante cuanto que no se limita a los aspectos contractuales de la protección de los consumidores. Similar es el fenómeno acerca de la protección de su seguridad con, por ejemplo, la directiva sobre la responsabilidad derivada de los productos defectuosos de 1985<sup>23</sup> y la Directiva 2001/95/CE, de 3 de diciembre de 2001, sobre la seguridad general de los productos. Y, con la perspectiva de la resolución de los litigios de consumo transfronterizos, ¿cómo no citar el Reglamento 44/2001/CE, de 22 de diciembre de 2000,

(Bruselas I) sobre la competencia judicial y el Reglamento 593/2008/CE, de 17 de junio de 2008, (Roma I) sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales?

Es decir, que salvo excepciones relevantes como las constituidas por la Directiva 93/13 CE, de 5 de abril 1993, relativa a las cláusulas abusivas, y la Directiva 199/44/CE, de 25 de mayo de 1999, sobre las garantías en la venta de bienes de consumo, las cuales son de armonización mínima, lo esencial de la protección de los consumidores procedente de la Unión Europea representa, hoy en día, un conjunto de normas uniformes, de orden público, que no soportan reglas nacionales diferentes. En consecuencia, ¿no se podría considerar que este conjunto reúne ya los elementos de un verdadero código europeo de consumo aplicable en todo el territorio de la Unión Europea? Tal código ya existiría, sólo faltaría completarlo.

9. Desde hace años, este concepto de Código europeo de consumo, que sustituya a las legislaciones nacionales existentes, ha sido objeto de debate<sup>24</sup>, y tiene sus partidarios<sup>25</sup>. Se le atribuyen varios méritos.

La unificación  
de las normas  
codificadas  
permitiría la  
supresión de los  
conflictos de leyes

Primero, la unificación de las normas codificadas permitiría la supresión de los conflictos de leyes y haría más fácil la resolución de los litigios de consumo transfronterizos. Sería por tanto un elemento determinante de la codificación en la medida en que se trata de incrementar los intercambios transfronterizos para la realización del mercado interior. De modo complementario, tranquilizados por la existencia de una protección uniforme, los consumidores ya no dudarían en aprovechar plenamente las ventajas competitivas facilitadas por ese gran mercado. Por otra parte, añadiéndose al euro, la adopción de un código europeo de consumo concretaría, al mismo tiempo que reforzaría, el concepto de ciudadanía de la Unión, habida cuenta de sus implicaciones para la vida cotidiana de sus quinientos millones de ciudadanos-consumidores. Además, sería la única vía concebible para la instauración de un verdadero derecho de consumo de la Unión Europea<sup>26</sup>, así como para proporcionar a una materia “particularmente amplia” la coherencia necesaria para su desarrollo<sup>27</sup>. Por fin, un derecho único llevaría más seguridad jurídica tanto a los consumidores como a los comerciantes o empresarios, suprimiendo los conflictos de competencia entre la Unión Europea y los Estados miembros<sup>28</sup>.

Desde un punto de vista formal, el instrumento de dicha codificación europea podría ser tanto un reglamento, como un convenio internacional<sup>29</sup>.

Sabemos que, por motivos similares, existen también otros proyectos de codificación europea, como son los relativos al derecho de contratos. Recordemos que en el año 2001 la Comisión había emitido una comunicación con el fin de recopilar informaciones sobre la necesidad de una acción comunitaria al respecto<sup>30</sup>, a continuación de los trabajos dirigidos por Ole Lando sobre los principios de derecho contractual europeo<sup>31</sup>. Sin embargo, resulta claro que ambos proyectos no pueden confundirse, ya que el derecho de consumo no se limita al ámbito contractual como consecuencia de su carácter multidisciplinar.

De todas formas, cualquiera que sea la codificación europea considerada, parece claro que la idea misma de unificación o uniformización de las normas aplicables en el seno de la Unión Europea procede de una visión más bien dogmática de las cosas, que desprecia las realidades, y, como consecuencia de ello, los verdaderos intereses de los consumidores.

## **B. La falta de pertinencia de la codificación europea**

**10.** La codificación europea del derecho de consumo se enfrenta a dos series de obstáculos, unos de orden técnico, otros de orden teleológico y práctico.

**11.** Desde un punto de vista técnico, el primer obstáculo para la unificación normativa radica en la diversidad de los idiomas vigentes en la Unión Europea, ya que desde el 1º de julio de 2013 el croata constituye su vigésimo-cuarta lengua oficial. Es decir, que la ley única, con las indispensables exigencias de traducción, existirá en veinticuatro versiones distintas. En estas condiciones, resulta evidente que por mor de la variedad de las tradiciones jurídicas existentes en la Unión y consiguientemente por las diferencias entre los vocabularios jurídicos y conceptos en uso, la unidad legislativa no puede ser más que una ilusión, sino un engaño. Tantas traducciones, tantas normas distintas, resulta conocido este fenómeno<sup>32</sup>.

Un ejemplo entre otros: la palabra “comerciante” (versión española) que sirve para la determinación del ámbito de aplicación de las directivas de protección de los consumidores, como sucede en la Directiva de 25 de octubre de 2011. En este mismo sentido, la versión rumana menciona al “comerciant”, pero en francés, portugués e italiano, se usa la palabra “professionnel”, “profissional” o “professionista”; mientras que en inglés se trata de un “trader”. Este ejemplo basta para mostrar la falta de equivalencia



entre esas nociones en los distintos ordenamientos jurídicos. De hecho, no hay equivalencia entre un “comerciante” y un “profesional”. Así, respecto al derecho francés, el “commerçant” no representa más que una categoría especial de “professionnel”, el cual está sujeto a un estatuto particular.

Además de los problemas de traducción, se plantea la cuestión de la interpretación de la ley traducida y presuntamente única. Por supuesto, no podrá ser una interpretación única, ni siquiera uniforme. En primer lugar, los encargados de dictar soluciones, los jueces nacionales, reaccionarán según los principios derivados de su propia tradición jurídica: por consiguiente, tantos jueces, tantas interpretaciones. Cada corte de casación o suprema nacional realizará su propia obra de unificación jurisprudencial en el seno de su propio sistema, sin consideración de los demás. Se necesitará muchísimo tiempo para que el Tribunal de Luxemburgo llegue a lograr la plena armonización. De hecho, no pueden ignorarse las lecciones de la historia. Por ejemplo, el Código civil francés fue literalmente, en el mismo idioma, el Código civil de Bélgica y de Luxemburgo. Sin embargo, sabemos muy bien que, a partir de un texto exactamente idéntico, se produjeron distintas interpretaciones de las cortes de casación nacionales. Desde hace tiempo existe la evidencia de que *una ley única no significa derecho idéntico*. Pretender que la codificación europea de las normas de protección de los consumidores serviría para uniformizar el derecho aplicable en este ámbito resulta cuanto menos falso, si no engañoso.

Y, de todos modos, sabemos que el derecho de la Unión Europea no abarca todos los aspectos de la protección de los consumidores. La codificación de que se trata no podría ser más que una codificación parcial. Hasta el momento, por lo menos, hay temas como el sobreendeudamiento de los consumidores o el crédito inmobiliario, que han sido tenidos en cuenta por varias legislaciones nacionales, pero sin eco en las directivas o reglamentos europeos. Y, lo que es más importante, no puede olvidarse que sobre algunas cuestiones la Unión no tiene competencia. Tal es el caso de las sanciones aplicables, tanto civiles, como administrativas o penales, o los procedimientos aplicables para la puesta en ejecución de los derechos otorgados. Desde este punto de vista la realización de un código europeo completo de consumo resulta totalmente ilusorio, y eso tanto cuanto más diversas son las concepciones mismas del derecho de consumo, de sus funciones, de su metodología, de su contenido y ámbito de aplicación.

La Unión Europea es rica en su diversidad, la cual puede combinarse muy bien con el sistema de armonización mínima de las legislaciones nacionales,

pero que en cambio no parece compatible con el principio de la regla única y obligatoria que desconoce los contextos nacionales.

12. Precisamente, desde un punto de vista teleológico, el sistema de la codificación, al igual que el de la armonización completa, parece sobrepasar las finalidades invocadas relativas a la realización y el funcionamiento del mercado interior.

En efecto, el actual artículo 114 TFUE (ex art. 95 CE), constantemente repetido en las actuales normas de plena armonización, preve sólo la “aproximación”<sup>33</sup> de las disposiciones legislativas o reglamentarias para las necesidades de dicho mercado. Ahora bien, “aproximación” y “uniformización”, y, a fortiori, “unificación”, no son palabras sinónimas. Es decir que, por ejemplo, cuando la Directiva 2011/83, de 25 de octubre de 2011, expone que los comerciantes y consumidores “deben poder contar con un único marco normativo”<sup>34</sup> con miras a eliminar los obstáculos en el mercado interior, las instancias de la Unión establecen una práctica que no respeta los términos mismos del Tratado. Esta práctica parece contraria a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, sin embargo vigentes en este ámbito. Precisamente, es preciso recordar que inicialmente, para la aproximación de las normas nacionales y la realización del mercado único, las instancias europeas adoptaban, con el mismo fundamento textual, sólo directivas de armonización mínima ¿Estaban equivocadas durante tantos años?

El exceso actual resulta tanto más inoportuno cuanto que las disparidades entre las legislaciones nacionales de consumo, contrariamente a las afirmaciones de la Comisión Europea, no constituyen los verdaderos obstáculos a la realización o al desarrollo del mercado interior y de los intercambios transfronterizos. Esas diferencias dejan indiferentes a los consumidores, ya que normalmente desconocen hasta su propia legislación nacional y sus derechos. Si su ignorancia o dudas sobre sus garantías explicasen sus reticencias a comprometerse con un empresario extranjero, eso implicaría también que no consumirían nada y nunca. Y, desde el punto de vista de los empresarios, la existencia de una norma única, no podría de todos modos exonerarlos de los costes necesarios para la puesta en conformidad lingüística de sus modelos de contratos en función de los países en los cuales desearían proponer sus bienes o servicios. En realidad, los obstáculos al comercio transfronterizo radican en varias circunstancias que, a menudo, se acumulan, como por ejemplo: las diferencias lingüísticas, que hacen más difícil la comprensión entre las partes, sea para ponerse de acuerdo, en el momento

de la celebración del contrato, sobre su contenido y sus modalidades, o sea para el arreglo de un eventual litigio posterior debido a una mala ejecución; los riesgos de fraudes con motivo del uso de la tarjeta bancaria en internet; la preferencia de los consumidores para el comercio de proximidad con un empresario perfectamente identificado, conocido y de confianza, y con quien se puede explicarse; la economía de los gastos y de la duración del transporte; las previsibles dificultades inherentes al servicio post-venta, las diferencias de regímenes tributarios, etc.

Pues bien, a la inversa del dogma procedente de la Unión Europea, *la realización del mercado interior no necesita en absoluto una unificación de las normas de protección de los consumidores*. El ejemplo de los Estados Unidos aporta una prueba más de ello: no resulta unificado el derecho de consumo en aquel país de estructura federal<sup>35</sup> y, sin embargo, ¿quién podría poner en duda la existencia allí de un auténtico mercado interior?

**13.** Además, la codificación europea del derecho de consumo produciría varios e importantes inconvenientes prácticos.

Primero, la norma única y obligatoria, necesariamente norma de compromiso entre varias tendencias, podría tener por efecto, si no por objeto, sustituyendo a las disposiciones nacionales existentes, de restringir o aminorar los derechos anteriormente concedidos a millones de consumidores. Ya se notó ese fenómeno con la práctica de las directivas de armonización completa<sup>36</sup>, especialmente en detrimento de los consumidores establecidos en los Estados de la Unión Europea que ya poseían una fuerte tradición de protección de los consumidores. Por ejemplo, las sentencias del tribunal de Luxemburgo de 25 de abril de 2002 reconociendo el carácter de plena armonización a la Directiva 85/374/CE sobre la responsabilidad por productos defectuosos obligaron a Grecia<sup>37</sup> y a Francia<sup>38</sup> a revisar su ley nacional, que preveía modalidades de indemnización más favorables para las víctimas. En el mismo sentido, decidió que en España no podía aplicarse al respecto la ley general de protección de los consumidores de 1984 porque dicha ley resultaba más favorable que la ley especial de transposición de 1994<sup>39</sup>. Otro ejemplo, entre otros, con la Directiva 2008/48/CE sobre el crédito al consumo, lo que obligó al legislador francés a admitir la licitud de las estipulaciones

Los consumidores  
ya no dudarían  
en aprovechar  
plenamente  
las ventajas  
competitivas  
facilitadas por ese  
gran mercado

anteriormente prohibidas, previendo una indemnización del organismo de crédito en caso de reembolso anticipado por el consumidor.

Si recordamos que aquellas directivas de armonización completa se adoptaron “a través del logro de un nivel elevado de protección de los consumidores”<sup>40</sup>, se nota el carácter por lo menos paradójico de la situación. Con el pretexto de conceder un nivel elevado de protección a los consumidores se produce una reducción de los derechos de millones de ellos. Tal situación resulta totalmente inoportuna en una época de globalización, que hace a los consumidores cada vez más vulnerables.

Por otra parte, la codificación europea tendría por efecto de cuajar, por un tiempo indeterminado, la norma aplicable. La experiencia demuestra, en efecto, que se necesita mucho tiempo, no sólo para establecer una norma común, sino también para revisarla. Por ejemplo se adoptó la Directiva 87/102 CE sobre el crédito al consumo después de once años de negociaciones y se necesitó después veintidos años para derogarla por la Directiva 2008/48 CE de 23 de abril de 2008. Es decir que el tiempo para reaccionar a las evoluciones de las prácticas comerciales, de la tecnología o del cambio de costumbres de consumo y, consecuentemente, para adaptar la norma correspondiente al contexto, resulta mucho más largo para el legislador europeo que para el legislador nacional. El riesgo consiste entonces en deber seguir aplicando durante años una norma europea desconectada de las nuevas realidades de los Estados miembros o de varios de ellos. El sistema de la codificación europea, sobre todos los aspectos codificados, priva de modo inoportuno al legislador nacional de su misión fundamental consistiendo en dotar sus ciudadanos de leyes que corresponden a su situación concreta y sus verdaderas necesidades.

Pues bien, el conjunto de aquellas consideraciones lleva a rechazar el concepto de codificación europea y preferir el de codificación nacional.

## **II. La preferencia por las codificaciones nacionales**

**14.** Si la codificación nacional presenta la gran ventaja de ahorrar los inconvenientes vinculados a la existencia de una codificación europea, sin perder el beneficio inherente a toda codificación<sup>41</sup>, no se ha de creer que dicha codificación nacional resulta más fácil. De hecho, existen dos grandes categorías de codificaciones: una codificación separada y una codificación integrada.

## A. La codificación autónoma

15. Es decir que en este sistema el derecho de consumo es objeto de una codificación propia. Se establece así un código de consumo distinto de los demás códigos existentes en el ordenamiento jurídico nacional considerado. El derecho comparado nos enseña que en este tipo de codificación son dos las fórmulas posibles: la codificación-compilación y la codificación-inovación.

16. La *codificación-compilación* es la que se realiza a derecho constante. Es decir, en esta opción, el legislador nacional intenta reunir en un único instrumento normativo, según una lógica temática, las diversas y dispersas leyes existentes, promulgadas sin coherencia, al capricho de las oportunidades, dedicadas a la protección de los consumidores. El primer objetivo de este tipo de codificación es de orden pedagógico. Se trata de facilitar el conocimiento de las normas vigentes por los consumidores mismos y por los jueces que se encargan de su aplicación.

Este método fue el que *Francia* eligió en 1993<sup>42</sup>. Más tarde, *Rumanía*, *Italia* y *Luxemburgo* adoptaron el mismo sistema<sup>43</sup>. Tal codificación se consideró como un progreso legislativo, aportando una cierta coherencia al derecho de consumo y reconociéndole un carácter pluridisciplinar original. Era como consagrarlo, proporcionando sus cartas de nobleza.

17. Sin embargo, a pesar del progreso que representa esta codificación en comparación con la situación anterior, no ha resultado plenamente satisfactoria. Presenta varios límites o debilidades.

Primero, en su propia lógica, la codificación-compilación se realiza sin añadidos y sin retiradas. El contenido de las normas existentes resulta igual en todas sus características. Ya que no cambian las varias leyes codificadas, tales leyes conservan la totalidad de sus defectos, padecen de las mismas lagunas y presentan las mismas dificultades de interpretación que antes.

Además, puesto en práctica de modo estricto, este método excluye de la obra de codificación todas las aportaciones de la jurisprudencia.

18. Por supuesto, una codificación a derecho constante no tiene como objetivo consolidar el Derecho aplicable, pues no impide las evoluciones legislativas, ni tampoco las innovaciones que completen o cambien las normas vigentes.

En este sentido, ha evolucionado bastante el código francés desde 1993. Tuvo que integrar muchas reformas, ya que el derecho de consumo es un derecho muy vivo. Pero a veces tal integración no resulta muy satisfactoria porque la nueva ley no se ajusta exactamente a una estructura del código anteriormente definida que el legislador, por comodidad, evita modificar.

Se practica así la chapuza legislativa. A menudo es el caso de las reformas impuestas por la transposición al derecho nacional de las directivas europeas<sup>44</sup>.

El reciente proyecto de ley francés “relativo al consumo”<sup>45</sup> proporciona una interesante ilustración de tales dificultades. A título esencial, teniendo por objeto instituir una “class action” a la francesa y transponer al derecho nacional la Directiva de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, dicho proyecto prevé también añadir por primera vez en el Código de consumo vigente, como disposición liminar, una definición general del “consumidor”: la misma que aparece en la directiva en su traducción francesa<sup>46</sup>. Buscando la uniformización a la vez nacional y europea de esta noción, este texto considera que proporcionar así más coherencia a nuestro Código. Sin embargo, si aquel proyecto se convierte en ley, el resultado será el contrario. En efecto, esa reforma no cambiará el ámbito de aplicación más o menos específico de cada una de las leyes que fueron codificadas. Por ejemplo, las disposiciones relativas a las cláusulas abusivas seguirán aplicándose, no sólo a los “consumidores”, sino también a los “no-profesionales”, entendidos por la jurisprudencia actual de la Corte de casación como personas jurídicas que contraten con un propósito ajeno a su actividad profesional<sup>47</sup>; igualmente para la protección instituida contra las cláusulas de renovación tácita<sup>48</sup>. Y hay más que choca con las disposiciones del Código dedicadas a la seguridad de los consumidores. La reforma proyectada se encaminaría a reservar la protección de la integridad corporal a las únicas personas físicas actuando fuera del marco de su actividad profesional. De este modo, por ejemplo, un artesano pintor de brocha gorda, ya no tendría derecho a recibir las informaciones útiles permitándole evaluar los riesgos inherentes a los productos que usa para satisfacer a sus clientes<sup>49</sup>. En estas condiciones, algunas personas físicas gozarían de un mayor derecho a su seguridad corporal que las demás según que actúen o no actúen con propósito ajeno a su actividad profesional. Al igual que en *Rebelión en la granja* de Orwell, algunas personas físicas resultarían al respecto más iguales que las demás; lo que sería contrario a nuestros principios constitucionales.

**19.** Por otra parte, la codificación a derecho constante corre el riesgo de volverse un sistema. Si se adopta este tipo de codificación para el derecho de consumo ¿por qué no extender esta fórmula a otras ramas del derecho? Es el caso de Francia que de nombre tiene hoy en día 69 códigos, esencialmente códigos-compilaciones realizados por una comisión administrativa, la Comisión Superior de Codificación. En este contexto, el problema radica en las múltiples ocasiones de interferencias entre varios códigos, porque

reglamentaciones determinadas pueden colocarse en varios códigos, lo que de modo inoportuno ha llevado al legislador francés a repetir textos idénticos en códigos distintos. Por eso, este tipo de codificación implica hacer esfuerzos para delimitar con precisión y rigor el contenido del derecho de consumo, es decir, ponerse previamente de acuerdo sobre el concepto mismo de derecho de consumo, lo que forma parte de él y lo que se queda fuera. Es un ejercicio muy difícil y debatido. Por ejemplo ¿dónde colocar la cuestión de las prácticas comerciales desleales después de la Directiva de 11 de mayo de 2005: Código de consumo, Código de comercio, Código penal? ¿Es preciso distinguir según las disposiciones consideradas, o no? ¿Existe una solución idónea?

Igualmente se plantea la cuestión con el otro tipo de codificación autónoma.

**20.** La *codificación-inovación* es un método más ambicioso; más difícil también, que exige una voluntad política particular. Sin embargo, en esta figura, la innovación puede ser de geometría variable.

De modo completo fue usada aquella fórmula en *Brasil* para la elaboración del Código de 11 de septiembre de 1990 estableciendo “normas de proteção e defesa do consumidor”<sup>50</sup>, dos años después de haber dispuesto, en la constitución federativa, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”<sup>51</sup>. Esa codificación fue enteramente innovadora en ausencia de leyes brasileñas preexistentes específicas sobre la protección de los consumidores. Tuvo varias legislaciones extranjeras como fuentes de inspiración<sup>52</sup>, hasta tal punto que se pudo caracterizar como una “obra comparatista”<sup>53</sup>. Este tipo de codificación se concibe en un país anteriormente desprovisto de dispositivo significativo de protección de los consumidores o cuyo dispositivo tenía que ser renovado.

**21.** Por supuesto, puede ser simplemente parcial la innovación inherente a la codificación del derecho de consumo. El *Código peruano* de 2010<sup>54</sup> representa una ilustración de este método en la medida en que este instrumento, preparado por una comisión especialmente designada por el poder ejecutivo, recoge la experiencia de aplicación de casi veinte años de la precedente ley de defensa del consumidor de 1991<sup>55</sup> y siguientes. Moderniza la normativa anterior, al mismo tiempo que armoniza las demás leyes, dispersas, existentes sobre el tema.

Un derecho  
único llevaría  
más seguridad  
jurídica tanto a  
los consumidores  
como a los  
comerciantes o  
empresários



Sin embargo, la nueva norma, ampliamente debatida y de mejor concepción, va más allá instituyendo la exigencia de protección a los consumidores “como un principio rector de la política social y económica del Estado” conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la constitución política<sup>56</sup>. Así se destacan ocho principios directores<sup>57</sup>: soberanía del consumidor<sup>58</sup>, interpretación pro consumidor<sup>59</sup>, transparencia<sup>60</sup>, corrección de la asimetría<sup>61</sup>, buena fe<sup>62</sup>, protección mínima<sup>63</sup>, pro asociativo<sup>64</sup> y primacía de la realidad<sup>65</sup>. Estos principios resultan importantes, porque representan las líneas rectoras que deberán ser tomadas en cuenta para la resolución de los litigios de consumo. De este modo, la reciente codificación peruana representa mucho más que simples mejoras a las normas vigentes, expresando “un cambio de visión, no de preceptos sino de principios, no del detalle sino del conjunto”<sup>66</sup>.

Al igual que los demás códigos de consumo, el Código peruano tiene por efecto presentar el conjunto de sus normas como una rama específica del derecho dedicada a relaciones de consumo.

Muy distinto es el sistema que consiste en la incorporación del dispositivo particular de protección de los consumidores en un código existente de ámbito general.

## **B. La codificación integrada**

22. En esta figura, las normas relativas a las relaciones de consumo resultan integradas en el Código civil. Podría ser también el Código de comercio. Pero de modo habitual, según el modelo alemán, se trata del Código civil.

Se sabe, en efecto, que con motivo de la transposición de la Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo de 1999, sobre la venta y garantías de bienes de consumo, *Alemania* eligió reformar su Derecho de obligaciones con una Ley de 26 de noviembre de 2001 que entró en vigor el 1º de enero de 2002. Frente a una pequeña solución (*kleine Lösung*), privilegió la gran solución (*grosse Lösung*), que consistía en reformar las disposiciones del Código civil (BGB) relativas a las obligaciones. Es decir que, de este modo, se integraron en el BGB elementos importantes del derecho de consumo<sup>67</sup>. El fenómeno había empezado con una Ley de 27 de junio de 2000<sup>68</sup> que había incorporado en el BGB las definiciones del consumidor y del proveedor al igual que disposiciones uniformes sobre el derecho de retracto. En adelante, se puede considerar que lo esencial de la protección contractual de los consumidores forma parte del BGB: contratos a distancia, contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, condiciones generales de contratación, “time-sharing”, crédito al consumo, garantías en las ventas de bienes de consumo. Esta *integración en*



*el Código civil* no se realizó en bloque sino punto por punto. Es decir que las normas de consumo se introdujeron en distintos libros, títulos y secciones del BGB, según la naturaleza del tema considerado.

Este método de codificación se fundamenta en la idea de que el derecho de consumo forma parte integrante del derecho civil. Si es verdad que el derecho de consumo no es de aplicación a todos los contratantes, no se puede ignorar que cualquier persona, con regularidad y de modo indispensable, actúa como consumidor. Consecuentemente, el Derecho de consumo rige una gran mayoría de contratos, lo que justificaría considerarlo como una parte del derecho civil. Así, desde un punto de vista práctico, se fortalecería la transparencia del derecho, y todas las disposiciones necesarias para la resolución de un problema jurídico se encontrarían en un mismo instrumento. Además, la integración en el Código civil haría resaltar las necesarias relaciones entre los principios generales del derecho civil y las disposiciones especiales del derecho de consumo.

Con variantes, varios países han elegido también este sistema de codificación civil del derecho contractual de consumo, Países Bajos, por ejemplo.

**23.** Recientemente, en el mismo sentido, se ha elaborado en *Argentina* un proyecto de “Código civil y comercial”<sup>69</sup> que incorpora disposiciones significativas de protección jurídica de los consumidores; una protección anteriormente inscrita en la Ley 24-240, de 13 de octubre de 1993, varias veces modificada desde su promulgación.

En especial, el código propuesto contiene, a continuación de un título II sobre “los contratos en general”, un título III dedicado a los “contratos de consumo” que, además de la definición del consumidor, regula las prácticas abusivas, la información y la publicidad dirigida a los consumidores, los contratos celebrados a distancia y fuera de los establecimientos comerciales<sup>70</sup> y las cláusulas abusivas. También, en el título IV relativo a los “contratos en particular”, se notan, por ejemplo, disposiciones específicas sobre los contratos bancarios con consumidores<sup>71</sup> o sobre el tema del tiempo compartido<sup>72</sup>. Y, fuera del ámbito contractual, dicho proyecto preve, por ejemplo, disposiciones sobre responsabilidad civil que complementan la legislación especial al respecto: función preventiva de la responsabilidad (art. 1710 y s.), nuevos daños resarcibles tales como la pérdida de chance (art. 1738). Por último, en anexo, se prevén varias modificaciones a la Ley general de 1993.

Para sus defensores, aquel proyecto, contribuyendo en elevar la jerarquía del sistema normativo de protección del consumidor, en adelante colocado entre la Constitución Nacional (art. 42 y 43) y la Ley 24-240, “traerá aparejado un incremento en su eficacia, por un mejor conocimiento

y compromiso de los operadores jurídicos en su aplicación”<sup>73</sup>. Representa “un avance significativo en el derecho del consumidor” proporcionándole una “estabilidad” que desconocía anteriormente<sup>74</sup>.

24. De modo abstracto, sin criticar los ordenamientos jurídicos que la adoptaron por consideraciones propias, se puede no obstante concebir que dicha fórmula de codificación-absorción de las normas de protección de los consumidores en el Código civil no sea la fórmula idónea. Sabemos, por ejemplo, que en 2005 Italia cambió su modelo, vaciando de su contenido el capítulo de su Código civil dedicado a los contratos de consumo (art.1469 bis y s.) en beneficio de su nuevo “Codice del consumo”.

En efecto, numerosos e importantes son los inconvenientes de la codificación civil en lo relativo a los consumidores.

Y, de todos modos, sabemos que el derecho de la Unión Europea no abarca todos los aspectos de la protección de los consumidores

Primero, este sistema niega el carácter específico y multidisciplinar del derecho de consumo. Este derecho, en efecto, no se limita a los aspectos contractuales, sino que comprende también aspectos administrativos, procesales y penales que no se pueden ignorar.

Además, aun considerando sólo el aspecto contractual, los contratos de consumo obedecen a *reglas derogatorias* en comparación con los principios del Código civil. No ha de olvidarse que todas esas reglas, relativas exclusivamente a las relaciones entre empresarios y consumidores, fueron adoptadas en consideración a la inadecuación de las normas civiles vigentes: derecho de retracto, derecho a la información, nulidad de las cláusulas abusivas, etc. Entonces, si ahora se trata de integrar esas normas contractuales específicas y derogatorias en el Código civil, se debería proseguir la lógica y, por ejemplo, incorporar en éste la normativa del contrato de trabajo en beneficio de los asalariados. ¿Cuál es la lógica que quiere integrar las disposiciones especiales relativas a los contratos de consumo en el Código civil y dejar fuera las, igualmente especiales, sobre los contratos de trabajo? En ambos supuestos, se trata de una legislación de protección de una parte débil contra una parte fuerte en el marco de relaciones contractuales determinadas. ¿Por qué uno en el Código civil y no el otro? No se entiende muy bien.

Y, en el caso argentino ¿cómo arreglar las relaciones entre las disposiciones del nuevo Código y las de la Ley 24-240, aun revisada? ¿Cuál es el principio de distribución de normas entre los dos?

Por otra parte, se nota que la práctica de la incorporación al Código civil desemboca en el fraccionamiento de las disposiciones aplicables a las relaciones de consumo. No sólo los dispositivos procesales, penales u otros relativos a la protección de los consumidores quedan fuera del Código civil, sino también la materia contractual resulta dispersa en varias de sus subdivisiones. Lo demuestra muy bien el BGB alemán y también, pero con menor intensidad, el proyecto argentino. De todas formas, esa fragmentación de las normas protectoras corre el riesgo de obstaculizar su conocimiento por parte de los consumidores y, consiguientemente, su eficiencia.

25. Finalmente, la cuestión de la codificación del derecho de consumo no es una ciencia exacta. Es el ámbito de la relatividad. Lo demuestra muy bien el derecho comparado.

Si, desde nuestro punto de vista, por lo menos, la codificación nacional del derecho de consumo presenta las ventajas de evitar los inconvenientes de una codificación coercitiva supranacional, su realización suscita el debate. Entre sus formas concebibles, nuestra preferencia va en el sentido de una codificación propia, separada del Código civil, con miras a consagrar la originalidad de este derecho, proporcionándole más relieve, favoreciendo su conocimiento y su buena aplicación.

Sin embargo, más allá de estos aspectos formales, lo más importante radica en la existencia de una protección efectiva en nuestro mundo que se globaliza y en el que los consumidores parecen cada vez más vulnerables.

## Notas

<sup>1</sup> El autor agradece al prof. Dr. Javier Lete Achirica, de la Universidad de Santiago de Compostela, la amistosa revisión del castellano de este texto.

<sup>2</sup> J. Calais-Auloy, *Un code, un droit*, in *Après le code de la consommation, grands problèmes choisis*, Litec, 1995, p. 13 y s.

<sup>3</sup> Desde este punto de vista, se nota que varios países, sin embargo sin verdadero «Código» de consumo, decidieron incluir la exigencia de protección a los consumidores en su Constitución: por ejemplo, Portugal, Constitución de 1976, art. 60; Lituania, Constitución de 1992 revisada en el 2004, art. 46; Polonia, Constitución de 1997, art. 76, Colombia, Constitución de 1991, art. 52, etc.

<sup>4</sup> Ley n° 93-949 de 26 de julio de 1993, JORF 27 de julio de 1993, p.10538 ; véase J. Beauchard, *Remarques sur le code de la consommation*, in *Ecrits en hommage à Gérard Cornu*, PUF, 1994, p. 9 y s. ; D. Bureau, *Remarques sur la codification du droit de la consommation*, D. 1994, chron. p. 291 y s. ; adde : G. Paisant, *A propos des vingt ans du code de la consommation*, JCP G, 2013 Etudes, 621.

<sup>5</sup> Ley n° 296 de 28 de junio de 2004.

<sup>6</sup> Decreto Legislativo n° 206 de 6 de septiembre de 2005.

<sup>7</sup> Ley de 8 de abril de 2011, Memorial 12 de abril de 2011.

<sup>8</sup> Ley 8078 de 11 de septiembre de 1990; véase C. Lima Marqués, A. Benjamin y B. Miragem, Comentarios ao código de defesa do consumidor, ed. Revista dos Tribunais, 3ra ed. 2010.

<sup>9</sup> Ley n° 29571 de 14 de agosto de 2010, Diario Oficial 2 de septiembre de 2010.

<sup>10</sup> BOE n° 287, 30 de noviembre de 2007; véase: R. Bercovitz Rodriguez-Cano (coord.) Comentario del texto refundido de la ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009 ; S. Cámara Lapuente (dir.), Comentario a las normas de protección de los consumidores. Texto Refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2011. En cambio, hay que destacar que en España Cataluña se ha dotado de un «Código de consumo»: Ley 22/2010 de 20 de julio de 2010, BOE 13 de agosto de 2010. Conforme al art. 123 del Estatuto de autonomía de Cataluña, la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de consumo.

<sup>11</sup> Sin embargo, si dicha Ley contiene la gran mayoría de las normas sobre la protección de los consumidores, no las contiene todas. No se integraron, por ejemplo, la Ley 4/2012 de 6 de julio de 2012 sobre el aprovechamiento por turno de bienes inmobiliarios, tampoco la Ley 16/2011 de 24 de junio de 2011 sobre los contratos de crédito al consumo. Adde, sobre las opciones posibles para la transposición de la directiva 2011/83 UE relativa a los derechos de los consumidores, E. Cordero Lobato, ¿Cómo transponer la directiva de consumidores al derecho español? Rev. CESCO de Derecho de consumo, n° 1, 2012, p.108 y s.

<sup>12</sup> JOCE C 92 de 25 de abril de 1975.

<sup>13</sup> Directiva 79/112 CEE, JOCE, L 8 de febrero de 1979; Directiva reemplazada por la 2000/13 CE de 20 de marzo de 2000.

<sup>14</sup> Por ej.: Directiva 84/450 CEE de 10 de septiembre de 1984 sobre la publicidad engañosa; Directiva 85/577 CEE de 20 de diciembre de 1985 sobre contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales.

<sup>15</sup> Por ej. CJCE 25 de abril de 2002, C-183/00 González Sánchez, D. 2002, p. 2462, nota Larroumet.

<sup>16</sup> Croacia fue el vigésimo octavo a partir de 1° de julio de 2013.

<sup>17</sup> TUE, art. 3.

<sup>18</sup> TFUE, art. 169.

<sup>19</sup> TFUE, art. 114 y 169; Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, art. 38.

<sup>20</sup> Se encuentran también las expresiones de armonización «máxima» o «total».

<sup>21</sup> Considerando 12.

<sup>22</sup> Ahora, art. 114 TFUE.

<sup>23</sup> Supra, n° 3.

<sup>24</sup> Por ej., en Francia, F. Osman (dir), Vers un code européen de la consommation, Bruylant, Bruxelles, 1998 ; Y. Picod y H. Davo, Droit de la consommation, sda ed. Sirey, 2010, n° 21.

<sup>25</sup> Por ej. J. Calais-Auloy, Un code européen de la consommation? in Vers un code européen de la consommation, préc., supra nota 23, p. 399 y s.

<sup>26</sup> S. Piedelièvre, *Droit de la consommation*, Economica, 2008, n° 19 ; G. Raymond, *Droit de la consommation*, Litec, 2008, n° 21.

<sup>27</sup> Th. Bourgoignie, *Droit et politique communautaire de la consommation*, in *Liber Amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p. 128.

<sup>28</sup> S. Chillon, *Le droit communautaire de la consommation après les Traités de Maastricht et d'Amsterdam*, Centre de droit de la consommation, Louvain la Neuve, 1999, p. 580.

<sup>29</sup> J. Calais-Auloy y H. Temple, *Droit de la consommation*, 8a ed., Dalloz, 2010, n° 43.

<sup>30</sup> COM/2001/0398 final, DO. C 255, 13 sept. 2001.

<sup>31</sup> *Principles of European Contract Law*, parts I and II, Kluwer Law International, 2000.

<sup>32</sup> Véase, por ej. : G. Lardeux, *Terminologie et traduction des législations relatives au droit des contrats*, *Rev. Int. Dr. Comp.* 2012, p 817 y s. ; H.P. Glenn, *La tradition juridique nationale*, *Rev. Int. Dr.Comp.* 2003, p. 263 y s.

<sup>33</sup> «Approximation» en inglés; «aproximação» en portugués; «rapprochement» en francés; «aproprierea» en rumano; «ravvicinamento» en italiano, etc.

<sup>34</sup> Considerando 7.

<sup>35</sup> S. W. Waller, J.G. Brady y R.J. Acosta, *Consumer protection in the United States : an overview*, *Eur. Journ. Consum. Law*, 2011/4, p 803 y s.

<sup>36</sup> Véase, G. Paisant, *Brèves considérations sur la question du recul des droits des consommateurs nationaux par l'effet du droit communautaire*, in *Mélanges Xavier Blanc-Jouvan*, *Soc. Lég. Comp.*, Paris, 2005, p. 329 y s.

<sup>37</sup> Asunto C- 154/00.

<sup>38</sup> Asunto C-52/00.

<sup>39</sup> Asunto C-183/00.

<sup>40</sup> Directiva 2011/83 UE, art. 1.

<sup>41</sup> *Supra*, n° 1.

<sup>42</sup> *Supra*, n° 2.

<sup>43</sup> *Supra*, n° 2.

<sup>44</sup> En Rumanía, se eligió integrar las Leyes de transposición posteriores a la promulgación del Código como anexos al mismo.

<sup>45</sup> Doc. Ass. Nat. n° 1015, 14a legislatura.

<sup>46</sup> «Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale».

<sup>47</sup> Cass. civ. 1ra, 15 de marzo de 2005, *Bull. civ. I*, n° 135 ; *JCP G*, II, 10114, nota Paisant ; *D.* 2005, p. 1948, nota Boujeka.

<sup>48</sup> C. cosom. Art. L 136-1.

<sup>49</sup> Véase C. consom. art. L 221-1-2 y L 221-1-3.

<sup>50</sup> Art. 1.

<sup>51</sup> Art. 5, § XXXII.

<sup>52</sup> A. Benjamin, C. Lima Marqués y L.R. Bessa, *Manual de direito do consumidor*, ed. *Rev. Trib.*, 2007, p. 46 y s.

<sup>53</sup> A. Bejamin y alii, prec., p. 49.

<sup>54</sup> Supra, nota 8.

<sup>55</sup> Decreto legislativo 716. Dicha ley sufrió varias modificaciones desde su promulgación, la más relevante de ellas debida a la ley 27311 de 2000 de fortalecimiento del sistema de protección al consumidor de 20 de junio de 2000 que reguló, entre otros aspectos, los métodos comerciales coercitivos y reforzó los mecanismos alternativos de arreglo de los litigios de consumo.

<sup>56</sup> Código de protección y defensa del consumidor, art. 1.

<sup>57</sup> Código, prec., art. 5; adde: J. B. Durand Carrión, Los vacíos del nuevo Código de protección y defensa del consumidor y su repercusión en los derechos del consumidor, feb. 2011, [www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/inv\\_consumidor.pdf](http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/inv_consumidor.pdf)

<sup>58</sup> En el sentido de que el Código debe fomentar las decisiones libres e informadas de los consumidores.

<sup>59</sup> Tanto para las normas vigentes que para los contratos por adhesión o cláusulas generales.

<sup>60</sup> Plena accesibilidad a la información y veracidad de dicha.

<sup>61</sup> Corrección de los desequilibrios entre proveedores y consumidores.

<sup>62</sup> Tanto para los proveedores como para los consumidores: confianza y lealtad entre las partes.

<sup>63</sup> El código no obstaculiza a normas sectoriales de mayor nivel de protección.

<sup>64</sup> Facilitación de la actuación de las asociaciones de consumidores.

<sup>65</sup> En la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

<sup>66</sup> W. Gutierrez, ¿Por qué era necesario un código de consumo? [www.ciudadanosyconsumidores.pe/?p=598](http://www.ciudadanosyconsumidores.pe/?p=598)

<sup>67</sup> A. Kull, L'intégration du droit de la consommation dans le BGB, in La réforme du droit allemand des obligations, Soc. Lég. Comp. Paris, 2004, p. 121 y s.

<sup>68</sup> Fernabsatzgesetz, con motivo de la transposición de la directiva 97/7/CE de 20 de mayo de 1997 sobre los contratos a distancia.

<sup>69</sup> Código civil y comercial de la nación, Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, R.L. Lorenzetti, pres., La Ley, 2012; R. Stiglitz, El derecho del consumidor en el proyecto de código civil y comercial de la nación, Derecho de consumidor, 1, ed. Hammurabi, 2013, p. 71 y s.

<sup>70</sup> R. Stiglitz, Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y contratos a distancia en el Proyecto de código civil y comercial, Rev. Dr. Comercial del consumidor y de la empresa, La Ley, oct. 2012, p. 173 y s.

<sup>71</sup> Art. 1384 y s.

<sup>72</sup> Art. 2100.

<sup>73</sup> G. Stiglitz, La defensa del consumidor en el Proyecto de Código civil y comercial, Rev.Dr. Comercial del consumidor y de la empresa, oct. 2012, p. 61 y s.

<sup>74</sup> G. Stiglitz, art. prec., p. 76.